

El Gobierno rechaza el mando único que exigen PP y Cs por los rebrotes

JAVIER CASQUEIRO, Madrid
El PSOE está de acuerdo con PP y Ciudadanos en que hace falta una mayor coordinación entre las administraciones para controlar los rebrotes, pero Gobierno y oposición difieren so-

bre cómo organizar esta etapa. Los socialistas abogaron ayer por reforzar ese trabajo de forma "compatible con el autogobierno" de las autonomías, a las que se devolvieron las plenas competencias tras el estado de alarma. PP y Cs,

en cambio, defienden reformas y medidas legales ordinarias para recuperar el mando único del Ministerio de Sanidad. "Hay un punto medio entre el estado de alarma y lavarse las manos", resumió el líder del PP, Pablo Casado.

La situación de inquietud y preocupación provocada por los rebrotes registrados en muchas comunidades autónomas, así como la imagen negativa de España que puede producirse como consecuencia de las recomendaciones de algunos países de la UE para que sus turistas no viajen este verano al país, ha vuelto a enfrentar a los dos bandos del Congreso. El PSOE reunió ayer a su ejecutiva federal, a la que asistió el presidente, Pedro Sánchez, y se empujó en transmitir la idea de que "la incidencia ahora del virus es menos grave" que la ya sufrida. Los socialistas destacaron que el país está mejor preparado porque ya ha aplicado cuatro millones de PCR, y pusieron en valor el papel jugado por Pedro Sánchez en la reciente cumbre europea para lograr unos fondos que pueden resultar capitales para "acelerar" la recuperación de España, destacó luego la presidenta de esta formación, Cristina Narbona.

La dirigente socialista concluyó que los datos actuales de contagiados, incluso en Cataluña, son críticos pero no para confinar ni esa comunidad ni ninguna, y ensalzó la "relación continua y fluida" del Ministerio con los responsables autonómicos.

Confiar en la mejora

El PSOE no quiso descartar ayer ningún escenario futuro de actuación del Gobierno central cuando se le preguntó por la amenaza de confinamiento total con la que advierte el presidente catalán, Quim Torra. Pero Narbona prefirió optar por "confiar en la mejora" de estos rebrotes en los próximos días y esperar a que el jefe del Ejecutivo valore todas las opciones el viernes 31 de julio durante la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebrará en San Millán de la Cogolla (La Rioja). La presidenta socialista sí recordó que en las conclusiones de la comisión de reconstrucción se abordaron muchas medidas que se podrían tomar para "mejorar la fluidez de la comunicación" y "reforzar la coordinación", pero siempre de manera "compatible con el autogobierno" autonómico.

PP y Cs creen, sin embargo, que ha llegado el momento para el Gobierno central de recuperar las riendas. El líder popular, Pablo Casado, citó a la comisión de seguimiento de la covid-19 de su partido, con exministros y exaltos cargos de sus gobiernos, para requerir al Ejecutivo una serie de reformas de la legislación ordinaria vigente que el PP apoyaría por la vía de urgencia y que cree que podrían estar en marcha en tres semanas, es decir en agosto. El PP entiende



Casado, ayer en la reunión de la comisión de su partido por la covid-19, en una imagen difundida por el PP.

Los populares proponen pagar PCR a todos los turistas

El Plan B para combatir la covid-19 que llevaba días anunciando Pablo Casado se divide en tres ámbitos de actuación: una batería de reformas de leyes existentes para devolver más poder al Ministerio de Sanidad y el Gobierno central para poder limitar movimientos de ciudadanos y confinamientos sin el estado de alarma; otras sanitarias para poner en marcha el que llaman *Plan Cajal*, un pacto de Estado para mejorar la sanidad públi-

ca, y, finalmente, planes de choque para paliar el impacto tremendo de la pandemia y sus rebrotes sobre el sector turístico del país.

En ese apartado, Casado propuso como gran novedad que el Gobierno de España financie las pruebas PCR que obligatoriamente tengan que hacerse los turistas que quieran visitar España para evitar la cuarentena obligatoria en su país de origen. Esas pruebas, que detectan la situación

que el Gobierno ha pasado del control total (estados de alarma) a la nada y que ahora debe supervisar más. Casado presentó una batería de reformas de artículos de leyes orgánicas sanitarias y de jurisdicción contencioso administrativa para dar más poder y mando único al Ministerio y poder limitar movimientos de personas sin recurrir al estado de alarma. Casado dijo ayer que eso es lo que opinan sus presidentes autonómicos y lo que le reclamarán el viernes a Sánchez, y se ofreció a hablarlo y pactarlo desde mañana mismo para que entre en vigor a la menor brevedad.

El discurso de Casado estuvo plagado de críticas a una gestión que ve nefasta y ocultista del Gobierno. En esta ocasión, el discurso del líder del PP fue calado al de la portavoz de la ejecutiva de Cs, Lorena Roldán.

La portavoz de Ciudadanos también fue muy dura contra "la dejación" y el continuo "mirar para otro lado" del Ejecutivo central, aunque mucho más contra la del Gobierno catalán de Quim Torra. Roldán anunció que enviaría formalmente una carta en la tarde de ayer a Sánchez para demandarle que aplique ya lo previsto en el decreto aprobado para la llamada nueva

del coronavirus en ese momento concreto, tendrían que hacerse tanto en origen como en destino y el coste de las mismas lo sufragaría el Gobierno español.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, aprovechó su comparecencia tras la ejecutiva socialista para subrayar que no entendían el comportamiento del Reino Unido al obligar a guardar cuarentena a los viajeros procedentes de España cuando consideró que ese país está en peor situación. Narbona alabó ahí la actuación de la ministra de Exteriores al intentar revertir ese bloqueo, particularmente para Canarias y Baleares.

normalidad en el que se fijaron mecanismos para que el Ministerio de Sanidad tome "el mando único" y el control de la situación, especialmente en Cataluña, y lleve adelante "acciones coordinadas con las comunidades autónomas ante un incremento de los contagios en determinados territorios del país".

Cs demandó que el Ejecutivo de Sánchez se adelanta con más medidas de prevención, "que tome las riendas" y que facilite "información veraz" sobre los rebrotes para recuperar "la sensación de confianza y seguridad" perdida tanto a nivel nacional como internacional.

Interior releva a Blanco en la Fundación de Víctimas del Terrorismo

R. R., Madrid
El Ministerio del Interior anunció ayer el relevo de Marimar Blanco como presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, la entidad estatal que aglutina a las asociaciones y fundaciones de víctimas. A Blanco, hermana del concejal del PP asesinado por ETA en Ermua en 1997, le sustituirá Tomás Caballero, hijo del concejal de UPN en Pamplona del mismo nombre asesinado por la banda terrorista en 1998. Interior anunció el cambio en una nota sin explicar las razones del relevo, pero elogió la "neutralidad política" demostrada por Caballero como vicepresidente de la Fundación, cargo que ostentaba hasta ahora.

Blanco, que llevaba ocho años al frente de la entidad, ha compaginado este puesto con cargos en el PP. Blanco fue diputada del Congreso por Madrid hasta 2019. En las últimas elecciones se presentó por Álava y no resultó elegida, pero desde enero es asesora de vivienda del grupo popular en el Ayuntamiento de Madrid. En la nota difundida por el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska, el Gobierno agradece a Blanco la "dedicación y trabajo en defensa de las víctimas del terrorismo, sabedor de que su compromiso en este ámbito ha sido, y será de carácter permanente".

Consenso político

La designación de Tomás Caballero se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. Interior destaca que el hasta ahora vicepresidente ha demostrado "una gran capacidad de consenso" que le ha permitido mantener buenas relaciones con las diferentes asociaciones de víctimas. El Gobierno señala que también ha valorado para su designación su compromiso en "la defensa plural de los valores e intereses de las víctimas del terrorismo". "Caballero tiene una larga e intensa experiencia en el movimiento asociativo de los damnificados por la violencia terrorista y se ha implicado desde hace años, desde la neutralidad política, en actividades de memoria de las víctimas y de promoción de los derechos humanos, en particular entre los jóvenes", explica Interior.

La Fundación Víctimas del Terrorismo se creó el 19 de diciembre de 2001 al amparo del Pacto Antiterrorista acordado entre PP, entonces en el Gobierno, y el PSOE, principal partido de la oposición, para aglutinar ayudas y colaborar con todas las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo registradas en nuestro país.